

## Editorial

# Debate por plan de regularización de migrantes

**E**l anuncio de una regularización “acotada” que formuló el gobierno, y que podría abarcar a unos 180 mil migrantes, ha desatado ásperas críticas desde diversos sectores, porque ven aquí la consagración de la impunidad para todos quienes ingresaron al país de manera irregular, y temen además que ello pueda generar un “efecto llamado”, incentivando a que más extranjeros vengan al país ante la expectativa de que en algún momento se abra otro proceso de regularización. La iniciativa también ha tenido partidarios, como ha sido el caso de una serie de gremios empresariales, los que estiman fundamental una medida de este tipo.

El anuncio llega justo cuando hay una enorme crisis de inseguridad en el país, donde uno de los responsables de este clima son precisamente violentas bandas de extranjeros -generalmente ligadas al crimen organizado- cuyos integrantes en la mayor parte de los casos han ingresado de forma irregular. En ese mismo orden de cosas, algunos estudios de opinión muestran que los sentimientos negativos hacia la inmigración -particularmente respecto de la que ha tenido lugar en los últimos años- han ido en aumento, lo que seguramente en buena medida deriva tanto del clima de inseguridad frente al aumento del delito, como del recelo que se produce cuando los ciudadanos chilenos deben competir con extranjeros por el acceso a cupos en colegios o en atención de salud. También es un hecho que las autoridades han tenido muchas dificultades para poder concretar procesos de expulsión -hacia mediados de año se registraban más de 28 mil órdenes de expulsión pendientes-, en tanto que en el Congreso se debate un proyecto que amplía las causales de expulsión y las prohibiciones de ingreso al país.

A la luz de ello, el ambiente para un anuncio de regularización de migrantes irregulares no parece ser el mejor, y es natural que haya despertado inquietud, porque muchos ven que va totalmente en contra de las señales que se quieren transmitir, en orden a frenar los ingresos irregulares y no dar la idea de que quebrantar la ley resulta impune. Con todo, una mirada más realista del asunto bien puede llevar a concluir que un proceso como el que se empeña el gobierno aparece como algo inevitable, ya que sin perjuicio de que constituye un enorme fallo del Estado ha-

ber descuidado nuestras fronteras durante tanto tiempo y no haber sido más estrictos con quienes estaban en el país en forma irregular, pretender ahora la expulsión de decenas de miles de personas resulta algo del todo inviable, y mantener a esa cantidad de migrantes sin ninguna regularización abre el riesgo de que algunos terminen delinquir o que muchos caigan en la marginalidad, viviendo en condiciones deplorables.

Ya que por lo visto no quedaba otra alternativa que regularizar, el Estado debe procurar que de ahora en más los mensajes que se entreguen sean los correctos y no den pie para que lleguen nuevas oleadas de migrantes, privilegiando la seguridad interna. En ello resulta fundamental asegurar que nuestra frontera estará efectivamente cerrada

Dado que no es viable expulsar a decenas de miles de personas, el plan del gobierno para una regularización parece inevitable. Pero para ello debe dar plenas garantías de un control efectivo de la frontera, algo en lo que aún hay dudas.

para la inmigración irregular, lo cual supone un enorme despliegue de capacidades y recursos para su efectiva vigilancia, además de entregar garantías de que de ahora en adelante no habrá impunidad con los infractores. El gobierno ha señalado que esta regularización se realizará respecto de extranjeros que previamente participaron del proceso de empadronamiento, y que ya no habrá nuevas convocatorias de este tipo. A su vez, asegura que el control de las fronteras ya se ha logrado gracias al despliegue de militares, pero los antecedentes disponibles abren margen para la duda. Si bien es efectivo que el año pasado se produjo una baja importante de ingresos irregulares, reportándose poco más de 43 mil casos -frente a los 52 mil de 2022-, los casos siguen contándose por miles, lo que continúa abriendo una puerta demasiado amplia para la irregularidad o la entrada de delincuentes. El gobierno tiene ahora la obligación de explicar con qué otras medidas pretende brindar la seguridad que los chilenos esperan respecto de la frontera y cómo pretende acer-

lerar las expulsiones pendientes.

Si bien la regularización puede ser un camino para solucionar un problema hoy acuciante, ello no debe llevar a perder de vista las implicancias de un actuar irresponsable a través de los años, que no tomó el peso de haber consentido un alto volumen de migración irregular. Sería muy grave que esta oportunidad para intentar ordenar la situación terminara siendo desperdiciada producto de no tomar las medidas correctas.